

CAMILO ECHANDÍA CASTILLA<sup>1</sup>

*Dinámica de la violencia paramilitar en Colombia*

---

<sup>1</sup> Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia [camilo.echandia@uexternado.edu.co](mailto:camilo.echandia@uexternado.edu.co) . Este artículo se elaboró en el marco del proyecto “Seguimiento y análisis del conflicto armado en Colombia” de la línea de investigación sobre Negociación y Manejo de Conflictos del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.



Resumen. Este artículo examina la actuación de los grupos paramilitares o de autodefensa y su relación con la dinámica global de la violencia en Colombia en las últimas dos décadas. Se mostrará que los altos niveles de homicidios registrados en el país hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa se explican, principalmente, por la violencia desatada por el narcotráfico y los grupos paramilitares en ascenso. Así mismo, el marcado incremento de los homicidios entre 1999 y 2002 tiene una estrecha conexión con el propósito de los paramilitares de lograr el predominio en no pocas regiones, mientras se adelantan las negociaciones entre el gobierno PASTRANA y las FARC. De otra parte, la disminución de la violencia en los últimos años también se relaciona con los grupos paramilitares que, tras haber logrado su consolidación en amplios territorios, en el marco del proceso de desmovilización durante el gobierno Uribe dejan de recurrir a la violencia masiva. Por último, se llama la atención sobre la persistencia de retaguardias armadas, que desempeñan la función de mantener el control que los grupos paramilitares lograron sobre el poder a nivel local y el narcotráfico, y cuya actuación en 2007 se comienza a expresar en el incremento de la violencia global.

Palabras clave. Paramilitares, Autodefensas, Narcotráfico, Violencia masiva, Violencia selectiva, Violencia global.

## INTRODUCCIÓN

En Colombia, a pesar del enorme desconocimiento sobre la identidad de los responsables de las muertes, presuntamente cometidas por organizaciones armadas, la dinámica de la violencia sugiere una estrecha relación con la actuación, principalmente, de los grupos paramilitares a partir de la década de los ochenta del siglo XX.

En este trabajo, se analizará la violencia producida por organizaciones armadas como proceso, siguiendo los planteamientos de STATHIS KALYVAS. A partir del estudio de diferentes conflictos internos, este autor concluye que la violencia generada en medio de la guerra está estrechamente vinculada con la presencia de actores organizados y la forma como éstos se relacionan con la población civil (KALYVAS, 2001).

La violencia en medio de la guerra civil, tal como lo señala el autor, corresponde a un proceso regulado, no se trata de un fenómeno caprichoso ni aleatorio. Se examinarán la secuencia y dinámica de hechos y decisiones que, combinados entre sí, producen actos de violencia. Este enfoque permite, además, aproximarse a los actores que participan en este proceso.

Es necesario tener en cuenta que la cuantificación de las víctimas producidas por las organizaciones irregulares en Colombia adolece de un subregistro. Se trata del tipo de violencia más oculta, debido a su carácter instrumental y al propósito de sus autores de no dejar ningún rastro que permita identificarlos.

No cabe duda de que la magnitud de esta violencia es mayor a la reportada; para constatarlo, basta tener en cuenta que en muchos casos las desapariciones forzadas ocurridas en lugares alejados, no fueron reportadas y sólo hasta ahora, con el hallazgo de cientos de fosas a lo largo y ancho del país, existe la posibilidad de conocerlas (*El Tiempo*, 24 abril de 2007).

El enorme desconocimiento acerca del número de víctimas producidas por la violencia organizada, también se encuentra asociado a las dificultades que enfrenta el sistema judicial para establecer la identidad de los responsables de las muertes, situación que se expresa en la permanente congestión del sistema (GAITÁN, 2006).

Aunque no se cuenta con elementos suficientes para esclarecer el complejo entramado del proceso de violencia en Colombia, en este trabajo se busca establecer específicamente si, en el desarrollo del conflicto armado, el recurso a la violencia, bien sea masiva o indiscriminada, se incrementa de manera importante en las zonas disputadas entre actores organizados, dentro de una lógica de destrucción del poder del actor de signo contrario, que abre espacio al surgimiento de un nuevo dominio sobre la población, el territorio y los recursos.

Así mismo, se indagará si la violencia es más bien selectiva cuando en un territorio la presencia de un actor armado se consolida y, por lo tanto, la competencia armada desaparece o es marginal.

## I. TENDENCIAS DE LARGO PLAZO EN LA EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA PRODUCIDA POR LOS GRUPOS PARAMILITARES

La distribución por años de los asesinatos cometidos por los actores organizados de la violencia permite identificar los cambios en la dinámica de la violencia organizada en Colombia entre 1998 y 2005<sup>2</sup>.

Entre 1888 y 1991, los niveles son elevados y, posteriormente, a partir de 1992, se registra una tendencia descendente, que continúa hasta 1995. En 1996 los asesinatos se incrementan en forma ostensible, especialmente desde 1997, y en 2001 llegan a su pico más alto. A partir de este año, pese a que se produce una leve caída en 2004, los asesinatos se mantienen en niveles elevados. El 20% de los asesinatos corresponde a víctimas de masacres de cuatro o más personas inermes, ultimadas por grupos armados en una misma acción.

---

2 Se utiliza la expresión asesinatos para señalar que son las muertes cometidas por actores organizados de violencia, incluyendo a las víctimas de masacres. Los datos utilizados son tomados del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.

La evolución de las masacres muestra cómo después de registrarse hacia finales de la década de los ochenta altos niveles de víctimas, en la primera mitad de los años noventa se impone una tendencia descendente que, luego, en la segunda mitad, se invierte. Pero es en los dos primeros años de 2000 cuando se producen los niveles más críticos de muertes en forma masiva, para luego comenzar a descender en 2002.

El recurso a las masacres tiene el propósito de impedir la consolidación de los avances del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias. Los asesinatos múltiples, que en algunos casos se realizan en forma selectiva, en la mayoría de los casos se producen en forma indiscriminada. Más allá del interés de eliminar específicamente los apoyos de un determinado actor, se llevan a cabo con el propósito de demostrar a la población la incapacidad de la contraparte, con la que ha convivido, para defenderla y que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al actor que da muestras de contar con un mayor poderío.

GRÁFICO I  
 PERIODIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL NÚMERO  
 DE INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARAMILITARES

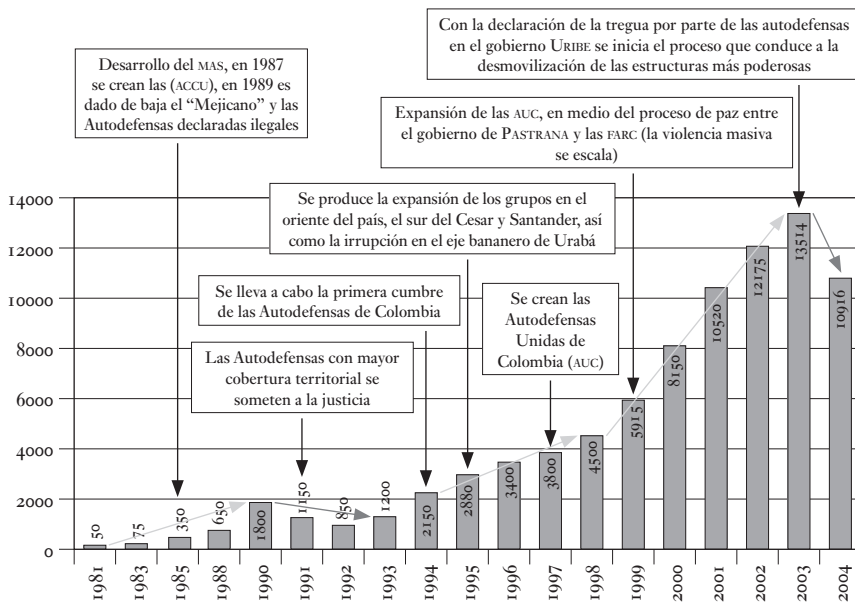
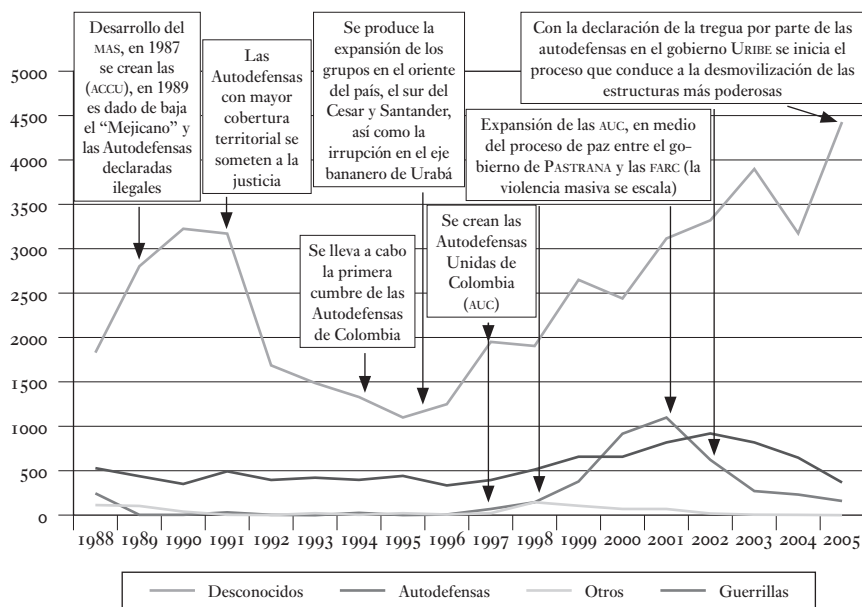


GRÁFICO 2  
RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE CIVILES



La evidencia que se presenta en los gráficos 1 y 2 sugiere que la mayor responsabilidad en las muertes producidas presuntamente por organizaciones armadas al margen de la ley, correspondería a las organizaciones paramilitares, en razón a que la periodización en la evolución de estos grupos se asocia, con asombrosa exactitud, a la dinámica que presentan los asesinatos sin autor conocido.

El origen de los grupos paramilitares, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de los ochenta, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla<sup>3</sup>. Aunque los grupos paramilitares fueron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución van quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios<sup>4</sup>.

3 Una lluvia de volantes fue lanzada desde una avioneta, el 2 de diciembre de 1981, en el estadio de Cali, donde algunos miles de hinchas que presenciaban un encuentro de fútbol, leyeron el mensaje del MAS, en el cual se hacía referencia al paralelismo entre el incremento de los secuestros cometidos por la guerrilla y el uso de espacios de apertura en el gobierno de BETANCUR, y prometían actuar en contra de los responsables.

4 Por medio del Decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968, se autorizó la creación de autodefensas para

Narcotraficantes, como PABLO ESCOBAR GAVIRIA y GONZALO RODRÍGUEZ GACHA, quienes lideraron la compra masiva de predios rurales, crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades, como, por ejemplo, el MAS en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá (CUBIDES, 1998).

A partir de 1982, las muertes se incrementaron dramáticamente en esta región. Las denuncias de los sectores afectados originaron, a principios de la administración de BELISARIO BETANCUR (1982-1986), una investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal.

Las conclusiones de las primeras investigaciones, reveladas a la opinión pública por el Procurador CARLOS JIMÉNEZ, señalaban a los paramilitares como los principales responsables de la intensificación de la violencia, con el apoyo de miembros activos del Ejército y la Policía (MEDINA, 1990).

Hacia mediados de la década del ochenta, los acuerdos de conveniencia entre la guerrilla y el narcotráfico, que por tiempo prolongado se mantuvieron en áreas de producción de coca, ubicadas sobre todo en el suroriente del país, se rompieron por las contradicciones que surgieron en el proceso de fortalecimiento del aparato militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este contexto, este grupo guerrillero empezó a imponer a los narcotraficantes sus condiciones, el pago de “impuestos” y el reconocimiento de su predominio.

Las contradicciones entre la guerrilla y estas estructuras comenzaron a expresarse, por parte de la guerrilla, en asaltos contra las instalaciones para el procesamiento de la coca, con el fin de sustraer el producto refinado, armas y dinero. En cuanto a los narcotraficantes, respondieron fortaleciendo sus estructuras armadas y creando otras, lo que les permitió adelantar campañas de exterminio contra todo lo que percibían como bases de grupos insurgentes. De esta forma, en las zonas donde los desacuerdos eran más fuertes, se desataron verdaderas oleadas de violencia.

Luego de expulsar a la guerrilla de la zona sur del Magdalena Medio, utilizando una táctica que evitaba al máximo los enfrentamientos directos con las estructuras armadas y, en cambio, atacaba el eslabón más débil, representado en las redes de apoyo, grupos seleccionados, de los que operaban allí, ayudaron a entrenar a otros semejantes en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari, en el Meta (REYES, 1991). Con la extensión del modelo Puerto Boyacá a otras regiones del país, los grupos paramilitares experimentan su primer gran

---

realizar tareas tendientes al restablecimiento de la normalidad en el orden público. Se permitió la instrucción y dotación de armas por parte de las Fuerzas Armadas a la población civil.

impulso, reflejado en el elevado número de asesinatos y masacres que comienzan a producirse.

Hacia finales de los ochenta era evidente que las autodefensas habían sufrido una profunda transformación en coincidencia con el auge del narcotráfico, factor que significó un enorme poder ofensivo.

En la administración de VIRGILIO BARCO (1986-1990) la lucha antsubversiva pasó a un segundo plano y, en medio de la persecución al narcotráfico, el gobierno se percató del peligro que representaban estas estructuras, convertidas en ejércitos de la mafia en pleno proceso de expansión<sup>5</sup>. En consecuencia, en 1989, el presidente de la República, mediante la derogatoria del Decreto de 1965, declaró ilegales a las autodefensas. Este mismo año, es dado de baja por la policía GONZALO RODRÍGUEZ GACHA, uno de los principales responsables de la elevación de violencia en los años ochenta.

Entre 1988 y 1991, como se corrobora en el gráfico 2, se impone una tendencia creciente en los asesinatos de civiles. En la mayoría de los casos se desconoce la autoría. Entre las víctimas se encuentran funcionarios del Estado, dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), de los partidos tradicionales, miembros de sindicatos y de organizaciones populares e indígenas. En la ejecución de los asesinatos, los autores tienen una clara procedencia en las estructuras asociadas al narcotráfico.

En la administración de CÉSAR GAVIRIA (1990-1994), las autodefensas, que habían crecido de la mano del narcotráfico, se sometieron a la justicia y en varias regiones hicieron entrega de armas, mediante los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, consistentes en reducción de penas y confesión voluntaria<sup>6</sup>. Como resultado, a partir de 1992 se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles y de miembros de organizaciones políticas y sociales, fuertemente golpeados por las autodefensas en los años anteriores.

---

5 Una investigación llevada a cabo en 1987 por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, permitió establecer que las masacres ocurridas en la región de Urabá, ejecutadas por una organización con asiento en el Magdalena Medio, en alianza con otra ubicada en el departamento de Córdoba, tuvieron como autores intelectuales a reconocidos “capos” del narcotráfico. De otra parte, la masacre de La Rochela, ocurrida en enero de 1989, en el corregimiento El Centro, de Barrancabermeja, donde un grupo armado atacó y dio muerte a los integrantes de una comisión judicial, que investigaba las masacres y los asesinatos que se venían cometiendo en el Magdalena Medio, demostró que la acción de las autodefensas se podía dirigir contra agentes del Estado.

6 En este momento, fueron tres los grupos que se sometieron a la justicia: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de RODRÍGUEZ GACHA, en Pacho (Cundinamarca); el que actuó en Puerto Boyacá, al mando de ARIEL OTERO, con cerca de 400 integrantes, y el de FIDEL CASTAÑO, que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá.



Pese a que la reducción de las víctimas de la violencia organizada es marcada, los asesinatos cometidos por la guerrilla comienzan a recaer en dirigentes y militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, fruto de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que condujeron a su desmovilización.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas y con mayor cubrimiento territorial, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso.

Fue así como, con posterioridad a la muerte de PABLO ESCOBAR en 1993, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de FIDEL y CARLOS CASTAÑO, comenzaron a registrar una expansión significativa, con el apoyo de desmovilizados del EPL, asediados en ese momento por las FARC y la disidencia de Caraballo.

Entre tanto, los grupos del Magdalena Medio, pese a haber protagonizado actos de dejación de armas, no se desactivaron: optaron por frenar su expansión, —excepto en el sur del Cesar—, no llamar la atención con actos de violencia y, ante todo, defender territorios fundamentales para el narcotráfico (SALAZAR, 1999).

El año 1994 es el punto de partida de la avanzada liderada por las ACCU y que se expresa, inicialmente, en el norte de Urabá. Al año siguiente, se produce la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, Occidente y Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.

Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se expresa, por una parte, en que la guerrilla registra pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que estos grupos tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener el avance de sus rivales.

En este contexto, tanto las autodefensas como las guerrillas, en competencia por el dominio del territorio, convirtieron a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que, a partir de 1996, comienza a experimentar la confrontación armada.

En el mes de abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos regionales.

Como ha señalado Fernando Cubides, estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito artificioso de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multirregional de las operaciones y una agenda con pretensiones programáticas,

todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un status que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político (CUBIDES, 1999 y 2005).

A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentan hechos de violencia en varias regiones, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas.

Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de ANDRÉS PASTRANA y las FARC, la presencia territorial de las autodefensas experimenta un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, cerca de 40 asesinatos y más de 100 casas incineradas dejaron las acciones de las autodefensas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada.

Posteriormente, en el mes de diciembre, aprovechando la declaración por parte de las AUC de una tregua unilateral durante la época de navidad, las FARC atacan el cuartel general de CARLOS CASTAÑO en el Nudo de Paramillo.

La retaliación a la incursión guerrillera, que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinan a 130 personas, por tener supuestos vínculos con la subversión.

La dinámica de las masacres es ascendente durante el periodo de las negociaciones con las FARC, situación que se explica por la lógica de expansión de los grupos de autodefensa, inscrita en el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera controlar los escenarios de producción de coca entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, estas organizaciones contarían con la posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur y oriente del país.

En este período, la tendencia creciente en la violencia asociada a la confrontación armada, se produce en la medida en que sus protagonistas desencadenan una dinámica en la cual dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina recurriendo a las prácticas de terror de su adversario. De aquí que la guerrilla, particularmente las FARC, incrementa la ejecución de asesinatos y masacres entre 1997 y 2001, siguiendo a las autodefensas<sup>7</sup>.

---

7 No sobra anotar una vez más que aun cuando en la mayoría de los asesinatos no se conoce el autor, la

Así mismo, se descubre la razón del enfrentamiento entre guerrillas y auto-defensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, Montes de María o Nariño, donde los grupos irregulares actúan con especial intensidad atacando civiles inermes, para lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos.

Hay que agregar que las comunidades, ante la presión de los grupos armados en los cascos urbanos, ubicados en zonas estratégicas a lo largo de los ríos y carreteras, se ven forzadas a desplazarse hacia las áreas selváticas, o quedan inmovilizadas en sus lugares de residencia. En buena parte de estos escenarios se producen bloqueos económicos e interrupciones en el suministro de provisiones. Como resultado, las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.

La desmovilización de las autodefensas, producida en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito el 15 de julio de 2003 con el gobierno URIBE VÉLEZ durante su primer cuatrienio, contribuye a afianzar la tendencia descendente en las masacres que, como se puede observar en el gráfico 3, se venía registrando desde 2002, antes de que se iniciara el proceso con las AUC.

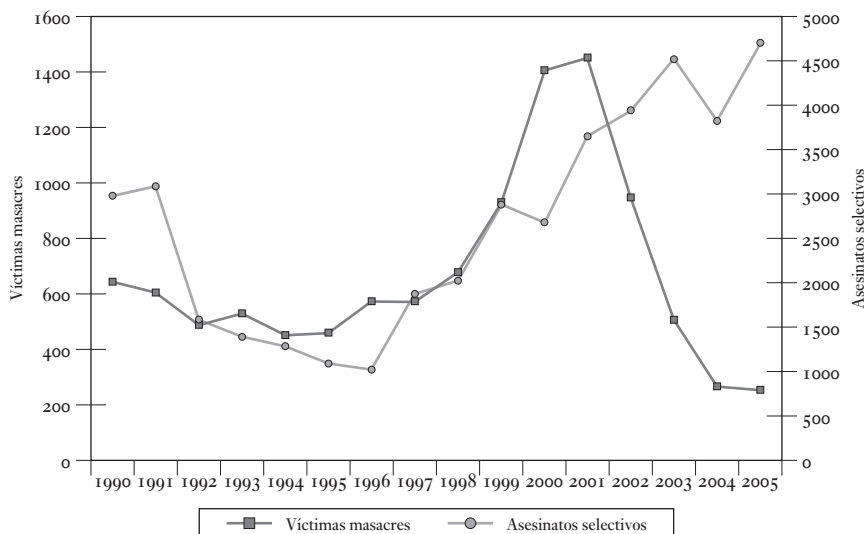
La disminución de las víctimas de masacres se relaciona, en primer lugar, con la conducta asumida por las autodefensas que, tras haber logrado la consolidación de su dominio en amplios territorios, dejan de recurrir a las masacres y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la Fuerza Pública logra retomar la iniciativa en la confrontación armada.

---

correspondencia entre la intensidad con que se producen las muertes y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren mayor protagonismo, evidencia la participación preponderante de este actor.

GRÁFICO 3

## EVOLUCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE MASACRES Y ASESINATOS SELECTIVOS



Es importante tener en cuenta que antes de que hubiera concluido el proceso de desmovilización, comienzan a aparecer estructuras armadas en zonas estratégicas en las que actuaban las autodefensas, fuertemente vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas (*El Tiempo*, 16 de octubre de 2005).

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en su Octavo Informe Trimestral, publicado en febrero de 2007, los grupos que han surgido en los escenarios donde tuvieron influencia las autodefensas son alrededor de 22, con cerca de 3.000 integrantes, y es evidente que cuentan con algunos de los desmovilizados que se han rearmado. Estos grupos, que están muy lejos de tener la presencia territorial de los que se desmovilizaron, según la Policía, se localizan en 102 municipios de 17 departamentos, aunque otros estudios dan cuenta de su presencia en cerca de 200 municipios, a través de 34 grupos, conformados hasta por 5.000 hombres (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, agosto 2007).

Las regiones donde estos grupos han comenzado a actuar son: La Guajira, norte y sur del Cesar, Córdoba, Magdalena, sur de Bolívar, Norte de Santander, Urabá, occidente de Antioquia, Vichada, Meta, Casanare, Arauca, Nariño, Tolima, Putumayo, Caquetá, Chocó y Caldas (*El Tiempo*, 16 de julio de 2007).

No todas las estructuras son posteriores a la desmovilización de las autodefensas. Algunas nunca hicieron parte de las negociaciones, como las Autodefensas.

sas Campesinas del Casanare y el Bloque Cacique Pipintá, en Caldas. Otras se encuentran bajo el mando de personas que se apartaron del proceso de negociación, como VICENTE CASTAÑO, los mellizos MEJÍA, PEDRO OLIVERIO GUERRERO CASTILLO (“Cuchillo”) y ALCIDES DURANGO (“René”).

Otros grupos, como “Los Machos” y “Los Rastrojos”, se encuentran al servicio de narcotraficantes del norte del Valle y se han extendido rápidamente a las zonas de influencia de las autodefensas en la costa Pacífica. Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, las estructuras que son cada vez más visibles por los hechos de violencia que protagonizan, rinden cuentas a algunos de los ex jefes de las autodefensas que se encuentran en prisión (*El Tiempo*, 25 de agosto de 2007 y *El Espectador*, semana del 23 al 29 de septiembre de 2007).

Pese a que se ha querido presentar a estas estructuras como el resultado de brotes aislados de criminalidad, que están muy lejos de tener la presencia y el poderío de los grupos que se desmovilizaron, se puede reconocer la existencia de un patrón que determina su aparición: la presencia del narcotráfico en zonas donde las autodefensas lograron el predominio frente a la guerrilla, mediante el recurso a la violencia masiva.

En efecto, como se corrobora en el gráfico 3, después de registrarse un período caracterizado por la acción indiscriminada de las autodefensas contra la población, se produce, como consecuencia de su consolidación territorial, la disminución de las masacres; pero, a partir de las estructuras que no se desmovilizaron, o que se presentan como “bandas criminales emergentes”, se recurre a la violencia selectiva para mantener el control sobre los territorios que fueron arrebatados o que están en riesgo de ser reconquistados por la guerrilla u otras organizaciones armadas.

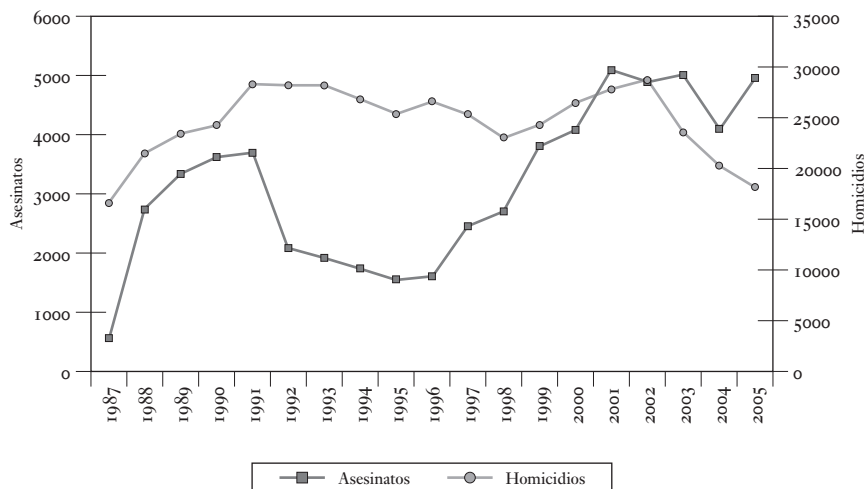
## II. INCIDENCIA DE LOS GRUPOS PARAMILITARES EN LA DINÁMICA DE LA VIOLENCIA GLOBAL

A lo largo de este artículo se ha visto cómo las organizaciones armadas desencadenan y exacerbaban procesos muy violentos que persisten por un tiempo en lugares determinados y, posteriormente, se desplazan hacia otros escenarios. En esta última parte se busca establecer hasta qué punto la dinámica global de la violencia en el país se relaciona con la evolución de las muertes producidas por organizaciones armadas y en particular por los grupos paramilitares.

En la comparación planteada en el gráfico 4, se advierte una elevada correspondencia entre las tendencias registradas en el conjunto de los homicidios (violencia global) y los asesinatos atribuidos a los actores organizados de violencia. La correspondencia resulta tan significativa que permite afirmar que la dinámica de

la violencia global del país se encuentra atada a la conducta de las organizaciones armadas al margen de la ley.

GRÁFICO 4  
COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA GLOBAL (HOMICIDIOS)  
Y LA VIOLENCIA ORGANIZADA (ASESINATOS)



Tampoco es coincidental que en los periodos más álgidos, la geografía de las muertes producidas principalmente por las organizaciones paramilitares corresponda con la geografía de la violencia global en escenarios como La Sierra Nevada de Santa Marta, La Serranía del Perijá, Catatumbo, Montes de María, Urabá, Paramillo, Occidente antioqueño, sectores localizados sobre los ríos Atrato, San Juan y Baudó en Chocó, Magdalena Medio (sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Barrancabermeja y su zona de influencia, sur del Cesar, oriente de Caldas), Oriente antioqueño, y sectores de Nariño y Valle, en la Costa Pacífica.

Los altos niveles de homicidios registrados hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa se explican, principalmente, por el escalamiento del conflicto armado y la violencia desatada por el narcotráfico y los grupos paramilitares en ascenso. De otro lado, la tendencia descendente registrada en los homicidios a partir de 1992 es resultado de la disminución en la intensidad del conflicto armado y del sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares con mayor poderío y cubrimiento territorial en el gobierno de CÉSAR GAVIRIA.

En 1996, el repunte de los homicidios se produce en medio de la irrupción de los grupos paramilitares en varias regiones. El marcado incremento en los homi-

cidios a partir de 1999 tiene una estrecha conexión con la enconada disputa entre paramilitares y guerrillas por el predominio en no pocas regiones, mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz entre el gobierno PASTRANA y las FARC.

La disminución de los homicidios registrada a partir de 2003 se relaciona, en primer lugar, con la conducta de los grupos paramilitares que, tras lograr consolidar su presencia en amplios territorios, en el marco del proceso de desmovilización adelantado durante el primer gobierno URIBE, dejan de recurrir a las masacres y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la Fuerza Pública logra retomar la iniciativa en la confrontación armada. Aunque la disminución de las masacres ha sido un factor determinante del descenso de la violencia global del país, en 2005 se registra uno de niveles más elevados de asesinatos producido por actores organizados, tal como se observa en el gráfico 4.

La evidencia presentada corrobora la pertinencia de los planteamientos esbozados por KALYVAS (Op. Cit.), en particular la relación entre el carácter masivo e indiscriminado de la violencia y la incursión, por parte de uno de los protagonistas de la confrontación, en un territorio dominado por otro. En este escenario, el actor que incursiona a la zona controlada por su oponente no tiene los incentivos ni la información suficiente para ejercer la violencia de manera selectiva.

En contraste, en las zonas en las cuales el nuevo actor logra el predominio, el uso de la violencia es limitado, puesto que, ante una situación de hegemonía, o cercana a la hegemonía, los niveles de disputa tienden a ser bajos o nulos (Ídem).

De esta forma, el nexo entre la confrontación y la violencia es explicado de tres maneras distintas por el autor. En primer lugar, las estructuras formales (en particular las militares) son débiles o inexistentes en confrontaciones internas, lo que hace posible la ocurrencia de todo tipo de excesos. En segundo lugar, la ausencia de vanguardias claramente definidas y la presencia de un enemigo literalmente a sus espaldas, incrementan la tensión de la tropa y facilitan reacciones ante la menor provocación. En tercer lugar, se desdibuja la diferencia entre civiles y combatientes (Ídem).

Otros autores han señalado que el recurso a la violencia masiva se convierte en terror pues, en cuanto el territorio es objeto de disputa entre varias organizaciones, que no logran controlar y homogeneizar una zona según sus intereses, los espacios de negociación disminuyen y se recurre a procesos de apropiación violenta (LAIR, 2003).

Los procesos de incursión violenta en una región llevan al actor que controla la zona a responder con violencia. Así, cada actor armado utiliza el terror en contra de las poblaciones, con el fin de persuadirlas a no prestar su apoyo,

ni material ni político, a su enemigo. Es una forma de librar una guerra de tipo “estratégico indirecto” (Ibid.).

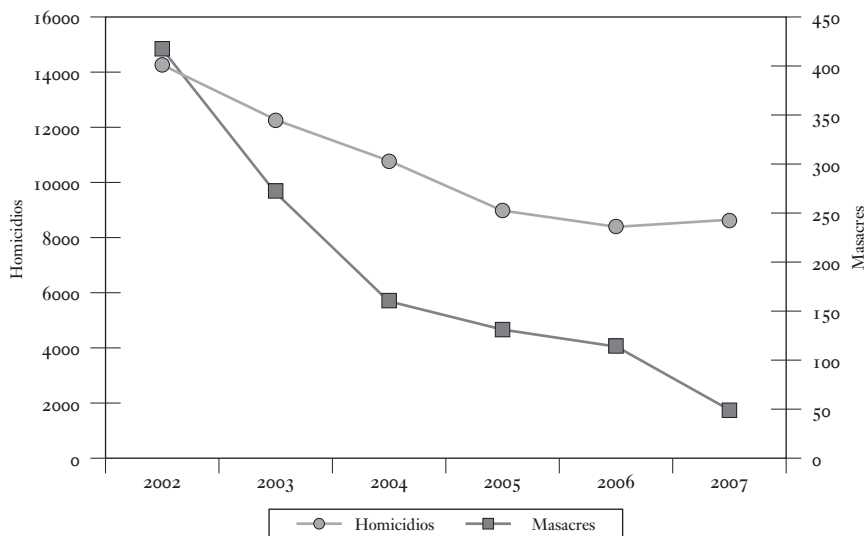
No son pocos los escenarios regionales donde, después de producirse la acción indiscriminada de las organizaciones armadas contra los civiles, se registra la disminución de las masacres –cometidas principalmente por los grupos paramilitares o de autodefensa–, reducción que coincide con la consolidación, por parte de este actor, de su dominio. En este contexto, el recurso a las masacres, como forma de violencia masiva, se torna innecesario.

No obstante, a partir de las estructuras que no se desmovilizaron, o que son presentadas como “bandas emergentes”, se incrementa la violencia dirigida a mantener el control sobre los territorios que fueron arrebatados, o aquellos en riesgo de ser reconquistados por la guerrilla u otras organizaciones.

Es importante llamar la atención sobre la tendencia ascendente registrada recientemente en los homicidios, no obstante que, como se aprecia el gráfico 5, la violencia masiva sigue cayendo. En efecto, a partir de la comparación de las cifras del primer semestre de 2007 con respecto a igual periodo del año anterior, se descubre que las muertes violentas aumentan en Casanare, Cesar, Arauca, Huila, Córdoba, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Boyacá, Bolívar, Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Santander, Magdalena y Valle, que corresponden a algo más de la mitad de los departamentos del país.

GRÁFICO 5

DINÁMICA DE LOS HOMICIDIOS Y LAS MASACRES 2002 – 2007 (ENERO – JUNIO)





Si se tiene en cuenta que las denominadas “bandas criminales emergentes” se proponen, por una parte, garantizar el control logrado por los grupos paramilitares con anterioridad a su desmovilización y, de otro lado, disputarle a grupos rivales el dominio sobre determinados territorios, se puede explicar el incremento reciente de los homicidios en departamentos del suroccidente, la costa norte y el nororiente del país. Así mismo, las bandas emergentes son responsables de la elevación de los homicidios en Cúcuta, Valledupar y Santa Marta, donde se disputan el control de sectores y actividades ilegales (*El Tiempo*, 6 de septiembre de 2007).

La evidencia presentada sugiere que los grupos emergentes en los espacios donde los paramilitares lograron consolidarse, son en realidad retaguardias que desempeñan la función de mantener el control sobre las administraciones locales y el narcotráfico, entre otras actividades del crimen organizado. No se puede perder de vista que el poder mafioso a nivel local y el narcotráfico son aspectos inherentes al paramilitarismo que, no obstante haberse producido la desmovilización de buena parte de su componente armado, se mantienen intactos.

Resulta muy dicente que las “bandas criminales emergentes” en el norte del país tengan una presencia geográfica que replica el patrón de expansión de los grupos desmovilizados, inscrito en el propósito de crear un corredor que permitiera controlar las áreas de producción de coca de Urabá, Córdoba, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Cesar y Catatumbo.

En estas zonas el narcotráfico se mantiene muy activo y la guerrilla ha dado muestras de fortalecimiento, lo que a su vez permite prever que se produzcan enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y que éstos desencadenen una dinámica en la que las respuestas para garantizar el dominio territorial se centren en la población.

Adicionalmente, en estas zonas el elevado grado de control sobre los cargos de elección popular (gubernaciones, alcaldías y concejos) es una clara expresión del poder mafioso alcanzado por los grupos paramilitares. Las enormes ganancias producto de la corrupción en la contratación pública, la impunidad frente a las instituciones del Estado y la capacidad de crear redes clientelistas propias, son el común denominador en los escenarios donde la influencia de este actor armado ha sido elevada.

En conclusión, a pesar de que la disminución de las manifestaciones de violencia en los últimos años cuenta con fundamentos sólidos, es preciso señalar que la actuación de las retaguardias de los grupos que se desmovilizaron, que son cada vez más visibles a través de diferentes formas de intimidación contra la población y los enfrentamientos que protagonizan con otras organizaciones al margen de la ley, han comenzado a incidir en la violencia global. Por lo tanto,

no es exagerado concluir que el país en el momento actual podría encontrarse en la etapa previa a una nueva escalada de violencia, cuyo trasfondo es el contexto del conflicto armado y la persistencia del paramilitarismo.

#### BIBLIOGRAFÍA

- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN (Agosto de 2007). *Disidentes, rearmados y emergentes ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?*, Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación.
- CUBIDES, FERNANDO (1998). “De lo privado a lo público en la violencia colombiana: los paramilitares”, en: AROCHA, JAIME, *et al.* (comps.). *Las violencias: inclusión creciente*, Bogotá: Utópica Ediciones.
- \_\_\_\_\_ (1999). “Los paramilitares y su estrategia”, en: Deas, Malcolm y María Victoria Llorente (comps.). *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: Editorial Norma-Cerec-Universidad de los Andes.
- \_\_\_\_\_ (2005). “Paramilitares y narcotráfico: ¿Matrimonio indisoluble?”, en: RANGEL, ALFREDO (ed.), *El poder paramilitar*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia y Planeta.
- GAITÁN, FERNANDO (2006). “El crimen organizado en Colombia”, en: MARTÍNEZ, ASTRID (comp.). *Violencia y Crimen. Ensayos en memoria de Fernando Gaitán*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- KALYVAS, STATHIS (Enero-abril de 2001). “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”, en *Análisis Político*, n.º 42.
- LAIR, ÉRIC (Junio de 2003). “Reflexiones acerca del terror en los escenarios de la guerra interna”, en *Revista de Estudios Sociales*, n.º 15.
- MEDINA, CARLOS (1990). *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá*. Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS-SECRETARÍA GENERAL (Febrero de 2007). *Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)*. Documento disponible en Internet: [www.mapp-oea.org](http://www.mapp-oea.org) (Consultado el 27 de agosto de 2007).
- REYES, ALEJANDRO (Enero-abril de 1991). “Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias”, en *Análisis Político*, n.º 12.

RUBIO, MAURICIO (1999). *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*, Bogotá: Universidad de los Andes y Tercer Mundo Editores.

\_\_\_\_\_ (1999a). “La justicia en una sociedad violenta: Los agentes armados y la justicia penal en Colombia”, en *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: Editorial Norma-Paz Pública-Universidad de los Andes.

SALAZAR, GUSTAVO (1999). *Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980-1999*. Bogotá: Presidencia de la República.

*El Espectador* (Semana del 23 al 29 de septiembre de 2007). “El reciclaje de Jorge 40”.

*El Tiempo* (16 de octubre de 2005). “Aparecen 12 nuevos grupos paras”.

*El Tiempo* (24 de abril de 2007). “Colombia busca a sus muertos. Las fosas de los paras”.

*El Tiempo* (16 de julio de 2007). “Hay grupos emergentes en la mitad del país”.

*El Tiempo* (25 de agosto de 2007). “Grabaciones: la prueba de que Macaco le hizo conejo a la paz”.

*El Tiempo* (6 de septiembre de 2007). “Bandas emergentes elevan crímenes en tres capitales”.

